

Santiago, cinco de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que mediante presentación de fecha 15 de marzo de 2024 comparece el señor Kenneth Maclean Luengo, abogado, en representación de Hipermercados Tottus S.A., ambos domiciliados en avenida Isidora Goyenechea N° 3120, piso 16, comuna de Las Condes, quien deduce acción de reclamación en contra la Resolución de Multa N° 8738/24/8, de fecha 21 de febrero de 2024, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, representada legalmente por la señora Sandra Ortiz Silva, ambos domiciliados en avenida Vitacura N° 3900, comuna de Vitacura.

Funda su pretensión señalando que su parte fue sancionada por estimar que infringió el inciso segundo del artículo 326 del Código Laboral, en relación al artículo 506 del mismo cuerpo legal, a una multa equivalente a 60 UTM, por estimar que no se estaba dando cumplimiento al contrato colectivo suscrito entre la empresa y el Sindicato de Empresa Servicios Generales Cerro Colorado Ltda., RSU 13220317, de fecha 5 de abril de 2021, vigente desde el 10 del mismo mes y año al 9 de abril de 2024, ambas fechas inclusiva, en relación a las obligaciones contenidas en la cláusula primera, "De las partes del contrato", con respecto "A que los derechos y obligaciones contemplados en este instrumento son extensivos a todos los trabajadores afiliados al sindicato", toda vez que se constata que el empleador no otorga los beneficios estipulados en la cláusula cuatro: Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad. Los cuales, deben incorporar al momento de su entrega el respectivo reajuste, a partir de lo pactado en contrato colectivo. Lo anterior al constatar el no pago de la suma de \$80.000, reajustado correspondiente al aguinaldo fiestas patrias, cuyo monto debió ser pagado, en el mes de septiembre del 2023, lo cual, fue pactado en contrato colectivo, con respecto a los siguientes trabajadores: I) Luisa Cáceres Contreras, RUT N°9.065.661-9; II) Gianina González Huencur, RUT 15.329.540-9; III) Rodrigo Bravo Barria, RUT 10.385.070-3; IV) Rosa Cornejo Medina, RUT 7.687.305-4; V) Paulina Nuñez Guerra RUT N 11.650.104-K; VI) Sandra Sigueñas Roque, RUT 25.728.446-8. Los cuales son socios del Sindicato. Quienes, por extensión del instrumento colectivo, de acuerdo con la cláusula "primero", debieron recibir la suma antes citada, pero recibieron un pago parcial. Además, del no pago de la suma de \$80.000, reajustado correspondiente al aguinaldo navidad, cuyo



monto debió ser pagado, en el mes de diciembre del 2023, junto a la entrega de una gift card por la suma de \$29.780, lo cual, fue pactado en contrato colectivo, con respecto a los trabajadores: I) Luisa Cáceres Contreras, RUT N°9.065.661-9; II) Gianina González Huencur, RUT 15.329.540-9; III) Rodrigo Bravo Barria, RUT 10.385.070-3; IV) Rosa Cornejo Medina, RUT 7.687.305-4; V) Sandra Sigueñas Roque, RUT 25.728.446-8; VI) Myriam Pérez Cayuman, RUT 13.437.8417; VII) Leticia Gallardo Cuyul, RUT 16.448.728-8; VIII) Betzabelh Fontena López, RUT 18.630.710-0; IX) Catalina Morales Rubio, RUT 20.257.047-K; X) Paulina Núñez Guerra, 11.650.104-K; XI) Judith Veracierta Centeno, RUT 26.449.415-K; XII) Ester Montilla Viloría, RUT 26.562.515-0; XIII) Erwin García Villalobos; XIV) Paulina Peñaloza Millapan, RUT 11.869.270-5. Los cuales son socios del sindicato. Quienes, por extensión del instrumento colectivo, de acuerdo con la cláusula “primero”, debieron recibir la suma antes citada, pero recibieron en cambio un pago parcial y además, no recibieron una gift card.

Explica que el fiscalizador incurrió en un error de hecho al cursar la infracción, por cuanto estima que no concurre el supuesto fáctico exigido en la norma supuestamente infringida.

Refiere que efectivamente se suscribió contrato colectivo con el sindicato mencionado con la vigencia ya indicada, en el cual se estipuló en la cláusula primera lo siguiente: “Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato Colectivo de Trabajo afectará, por una parte, a la empresa Hipermercados Tottus S.A., y por la otra, a los trabajadores socios del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Servicios Generales Cerro Colorado Limitada, que se individualiza en la nómina adjunta”

Dicho instrumento regula las condiciones de trabajo y remuneraciones de los trabajadores que han concurrido a su celebración a través de los sujetos negociadores, siendo los indicados en el anexo N° 1 denominado “Listado de Personas afectas al Instrumento Colectivo”, que contiene una nómina de 136 trabajadores.

Las personas mencionadas en la resolución de multa no figuran en el aludido listado, siendo trabajadores que no concurrieron en la celebración del convenio y que no resultan obligados por el instrumento colectivo, no contemplando el mismo la posibilidad de extender los beneficios a trabajadores que a la firma del contrato no eran parte de la empresa o que



siéndolo no participaron en el proceso de negociación colectiva, por lo que no es cierto que se haya incurrido en infracción a la norma señalada, efectuando una interpretación el fiscalizador concluyendo que las partes establecieron la posibilidad de extender sus beneficios, siendo exigible las estipulaciones a los trabajadores indicados en la multa, aunque no fueran parte de la celebración del instrumento.

Manifiesta que resulta necesario determinar que trabajadores se encuentran afectos a un instrumento colectivo, los que en principio regulan las condiciones de trabajo y remuneraciones de los trabajadores que han concurrido a su celebración a través de los sujetos negociadores, tratándose de la eficacia normativa de los instrumentos colectivos, afectando a cada uno de los contratos individuales de los trabajadores que son parte de él, siendo la eficacia de los mismos personal y limitada, aplicándose a los trabajadores que son representados por el sindicato o grupo negociador, lo que se infiere de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 321, inciso tercero del artículo 323, inciso primero del artículo 328, todos del Código del Trabajo.

Expone que si bien el contrato de trabajo establece la posibilidad de que un instrumento colectivo se aplique a trabajadores que a la firma del contrato o si bien siéndolo no participaron del proceso de negociación, lo que se encuentra previsto en el artículo 322 del Código Laboral, ninguno de los requisitos previstos en dicha disposición concurre en la especie, ya que el contrato colectivo no contempla una cláusula de extensión de beneficios, pretendiendo la reclamada otorgarle tal valor a la cláusula primera del acuerdo que no cumple con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 322 del Código Laboral, ya que la intención de las partes nunca fue acordar la extensión de beneficios, estableciéndose con la finalidad de no hacer distinción entre los trabajadores afectos al contrato colectivo, debido que los instrumentos previos o de otros sindicatos si establecían diferencias.

Agrega, que tampoco existe aceptación expresa de los trabajadores de la extensión de los beneficios que le formula el empleador a través de un anexo, no encontrándose tampoco los trabajadores indicados en la resolución de multa en la situación prevista en el artículo 322 del Código Laboral, por cuanto los trabajadores no se encuentran sin afiliación sindical, siendo trabajadores que no negociaron colectivamente, afiliándose con posterioridad a la suscripción del instrumento colectivo.



Manifiesta que de la revisión de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores individualizados en la multa correspondiente a los meses de septiembre y diciembre de 2023 se observa que los trabajadores recibían el pago de aguinaldos de fiestas patrias y navidad, tales conceptos corresponden a beneficios históricos que la compañía otorga a todos los trabajadores y que no guardan relación con el instrumento indicado en la resolución de multa.

Con todo, la reclamada al interpretar la cláusula primera del contrato como un acuerdo de extensión de beneficios contradice la intención que tuvieron las partes al momento de suscribirlo, no habiéndose manifestado una intención de voluntad en ese sentido y lo que se buscaba era no hacer distinción entre los trabajadores afectos al Contrato Colectivo basadas en el cargo, lugar de prestación de los servicios, u otras variables. Históricamente los instrumentos colectivos sí efectuaban tales distinciones, lo cual incidía en el monto y condiciones de algunos beneficios, entregándose los beneficios establecidos a instrumentos colectivos a personas aportantes, sino solo aquellos que figuran en la nómina del contrato colectivo, ejecutándose el contrato desde su entrada en vigor, siendo claro el tenor de la cláusula.

En subsidio, manifiesta que existió un error de derecho, ya que la supuesta norma infringida dice relación con no cumplir las estipulaciones del instrumento colectivo, de acuerdo a la posibilidad que la legislación le entrega a la reclamada de sancionar tales incumplimientos y al constatar el incumplimiento del contrato colectivo el fiscalizador realizó un ejercicio interpretativo, concluyendo un acuerdo de extensión de beneficios, lo que escapa al ejercicio de sus facultades, pretendiendo modificar la forma en que se da cumplimiento al contrato, en relación a trabajadores afectos a dicho instrumento y a la exigibilidad de las obligaciones contenidas en él, siendo resorte exclusivo de los tribunales de justicia efectuar dicha interpretación, todo conforme lo previene la letra a) del artículo 420 del Código del Trabajo, en relación al inciso primero del artículo 6°, 7°, inciso primero del artículo 76 de la Carta Fundamental.

En subsidio, solicita la rebaja de la multa aplicada, estimándola desproporcionada, aplicándole el máximo de la multa posible, en circunstancias que los hechos que motivaron la sanción no revisten caracteres de gravedad suficiente para tomar la decisión de sancionarla en



su máximo, teniendo presente la excepcionalidad de la infracción y la magnitud del bien jurídico lesionado.

Termina solicitando que se acoja la acción promovida, se deje sin efecto la multa aplicada y, en subsidio la misma se rebaje, con costas.

Segundo: Que con fecha 9 de mayo de 2024 se celebró la audiencia de contestación, conciliación y prueba. La reclamada contestó solicitando el rechazo de la acción promovida, con costas.

Reconoció la existencia de la multa y contenida del misma, constatándose en la fiscalización que en la cláusula primera del contrato que los derechos y obligaciones del contrato colectivo se les aplica a todos los afiliados al mismo, cuestión que no ocurría en el presente caso, cuestión que es un punto no controvertido por la empresa, argumentando que el motivo que los trabajadores no eran parte de la nómina inicial del contrato colectivo, por lo que no le correspondería los beneficios pese a que se afiliaron con posterioridad.

Entiende que la interpretación de la reclamante es errada, porque la figura de extensión de beneficios es propia de quienes no están afiliados al sindicato o no cuentan con afiliación sindical y cuando se habla de personas afiliados al mismo lo que regula la situación es el artículo 323 del Código Laboral, existiendo norma expresa que señala que un trabajador pasa a estar inmediatamente afecto al contrato colectivo, salvo que esté sujeto a uno anterior. De no ser así no habría interés del trabajador para sindicarse, situación que se pretendió modificar a través de la norma citada, cuestión que se debe a que dicha norma tiene por objeto fomentar las organizaciones sindicales. Estima que dicha norma es de orden público laboral y por tanto irrenunciable.

Añade, que en relación a la inconstitucionalidad del artículo 323 del Código del Trabajo es una cuestión que no atañe a la controversia.

En cuanto a la petición de rebaja sostiene que se trata de una gran empresa, sin perjuicio que ella ha sido multada 33 veces en los últimos 6 meses y presenta más de 517 multas cursadas por el servicio, pretendiendo la empresa efectuar una interpretación normativa contraria al ordenamiento jurídico laboral, yendo contra normas expresa irrenunciable, sin perjuicio que no es posible darle el sentido que pretende.

Se efectuó el llamado a conciliación, el que no prosperó, fijándose el siguiente hecho pacífico: “existencia del acto administrativo impugnado y



contenido del mismo”.

Por su parte, se establecieron los siguientes hechos controvertidos:

1.- Si la reclamada al momento de cursar la multa incurrió en un error de hecho.

2.- Razones que justifican la petición de rebaja de multa.

Tercero: Que la parte reclamante aportó los siguientes elementos de convicción:

Documental.

1.- Resolución de Multa N° 8738/24/8, de fecha 21 de febrero de 2024, emitida por la Inspección Provincial del Trabajo.

2.- Correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2024, asunto “Informa término de fiscalización N°1322/2024/583”.

3.- Contrato Colectivo suscrito entre Sindicato de Trabajadores de Empresa de Servicios Generales Cerro Colorado S.A. e Hipermercados Tottus S.A. de fecha 05 de abril de 2021, junto al anexo N°1: Listado de Personas afectas al instrumento colectivo.

4.- Cadena de dos correos electrónicos, Asunto “RV: Contrato colectivo del sindicato.pdf”.

5.- Liquidaciones de remuneraciones de los meses de septiembre y diciembre de 2023 de doña Elizabeth Muriel Gil.

6.- Autorización de descuento Sindicato de Empresas Servicios Generales Cerro Colorado Ltda. suscrita por doña Lorena Millán Foucault.

7.- Liquidaciones de remuneraciones de los meses de septiembre y diciembre de 2023 de doña Lorena Millán Foucault.

8.- Liquidaciones de remuneraciones correspondientes al mes de septiembre de 2023 de los trabajadores Luisa Cáceres Contreras, Gianina González Huencur, Rodrigo Bravo Barría, Rosa Cornejo Medina, Paulina Núñez Guerra y Sandra Sigueñas Roque.

9.- Liquidaciones de remuneraciones correspondientes al mes de diciembre de 2023 de los trabajadores Luisa Cáceres Contreras, Gianina González Huencur, Rodrigo Bravo Barría, Rosa Cornejo Medina, Sandra Sigueñas Roque, Myriam Pérez Cayuman, Leticia Gallardo Cuyul, Betzabelh Fontena López, Catalina Morales Rubio, Paulina Nuñez Guerra, Judith Veracierta. Centeno, Ester Montilla Vilorio, Erwin García Villalobos y Paulina Peñaloza Millapan.

Testimonial.



1° testigo Javiera Cayupe, quien señaló: que trabaja en la reclamante desde hace 5 años en el área de relaciones laborales; sabe que se le aplicó una multa, ve la zona oriente, entiende que la multa es por la aplicación de beneficios a socios que no estaban en la nómina; estuvo en las negociaciones, en la negociación del año 2021 estuvo su jefatura por parte de los empleadores; como empleador siempre se pacta los beneficios que está en la nómina y en las mesas de negociación se ve si hay un acuerdo de extensión de beneficios o no; entiende que en la negociación hubo una particularidad porque se cerró la tienda de Kennedy que era el base de Cerro Colorado y se distribuyeron en otras tiendas y se acordó que los beneficios se harían aplicables a los trabajadores de la nómina y la cláusula se pactó para que independiente de la zona de los socios del sindicato se pagaran de igual manera; dependiendo de las zonas hay algunos enfoques en los beneficios, por eso se especificó que a los socios que estaban en la nómina se iba a pagar a todos por igual; si la empresa quisiera aplicar beneficio a todos los afiliados se pacta una cláusula transitoria de extensión de beneficios en el que se detalle a quienes va aplicar, que establecimiento debe trabajar, domicilio del establecimiento, el valor de la cuota que debe pagar para recibir los beneficios, que beneficios aplicar y la vigencia que va a tener en el año 2024 se acordó con el mismo sindicato no extender los beneficios; en el año 2021 la directiva no es la misma del año 2024, ellos se fueron; y la nueva dirigencia empezó en el año 2022; la dirigencia nueva le empezó hacer varias preguntas acerca de cómo se aplicaban los beneficios por el segundo párrafo de la cláusula primera, a mediados de 2023 se contactaron con los jefes de tienda donde tenían más socios consultando porque no se estaban aplicando los beneficios, le consultó a los jefes de tienda se confirmó que no se estaba aplicando la extensión de los beneficios a los trabajadores que no estaban en la nómina, recibiendo los nuevos socios los beneficios pactados por la empresa; en la mesa negociadora se trató de aplicar la postura acerca de porque no podía extenderse los beneficios por no ser la naturaleza de la cláusula, y se acordó que se pactaba en la cláusula transitoria con las condiciones que se indicaron ya; en la negociación de 2024 no se pactaron beneficios para nuevos socios, así se acordó expresamente, se llegó a ese acuerdo porque el sindicato prefirió otros beneficios versus la extensión de beneficios.

Contrainterrogada por la reclamada señaló: que los trabajadores de la



multa están todos afiliados a la organización sindical que pactó el contrato colectivo del año 2021; no se les están entregando el beneficio por no estar en la nómina inicial.

Interrogado por el tribunal manifestó que no participó en la negociación colectiva del año 2021; tomó conocimiento de terceros de lo que ocurrió.

2° testigo Camila Valenzuela, la que expresó: que trabaja en la reclamante, es jefe zonal de recursos humanos hace 8 años, le corresponde la zona oriente y poniente de Santiago, un total de 24 tiendas; tiene relación con los sindicatos de esa zona; conoce al sindicato Cerro Colorado, se relaciona con ellos constantemente por su función, también negociaron con ellos; en las negociaciones se hace un presupuesto, un análisis de la situación de la tiendas relación con el sindicato hay pendientes previos y luego se hace el proceso de coordinación con el sindicato; la directiva actual es nueva no participó, la directiva anterior, participaron dos, cuando se presentó con ellos le informaron que tenían un tema con la extensión de los beneficios, debido que interpretaban una cláusula en relación a la extensión de beneficios, se pidió la extensión de los beneficios a socios que no eran nóminas que participaron en la negociación, se envió al área legal la cláusula, entendiendo que lo se quiso señalar es que cada beneficio se hará aplicable a todos los beneficios, con independencia en la tienda que estaban, y no había una cláusula de extensión de beneficios; cuando se negoció de manera colectiva, los beneficios se otorgan a los socios que negocian en esa oportunidad, si se extienden podría entenderse que se entrega a cualquier persona afiliado, y ahí está el problema del presupuesto, que se escapa el control del presupuesto y no estaba considerado la extensión del beneficio; cada negociación colectiva asigna un presupuesto para negociar y se trata de administrar de manera eficiente; acá el presupuesto más complejo porque había una situación particular porque el sindicato tenía su base en la tienda de Kennedy, la que se cerró en el 2020 y todos los socios se distribuyeron en distintas tiendas a nivel nacional, perdiéndose el control cuando se asigna un presupuesto se hace por una tienda y a que habían más de 18; se le exhibe el contrato colectivo de 5 de abril de 2021; el anexo 1 indica los socios que están afectos a la negociación, la cláusula era establecer que todos los trabajadores iban a percibir los beneficios y que no se iba hacer distinción entre ellos porque no



iban estar en distintas tiendas: en la nueva negociación se habló expresamente que no había voluntad de extender beneficios y que solo se aplicaría para los trabajadores de la nómina, fue un tema pero se hizo presente que no se iba a poder; los nuevos afiliados no perciben los beneficios del contrato colectivo y de la empresa.

Contrainterrogado por la reclamada señaló: que no es posible proyectar los beneficios; no se están entregando los beneficios pactados en el contrato colectivo; que no participó en la negociación colectiva en el año 2021; se lo comentó quien participó en la comisión negociadora.

3° testigo Nelson Olivero: trabaja en la reclamante es jefe de operaciones, se relaciona con sindicatos, conoce a Cerro Colorado, los presupuestos de cada negociación está determinada por la cantidad de socios y conforme a la historia se van determinando los presupuestos y los alcances que deben tener cada sindicato, el alcance se refiere a trabajadores que están en una sola tienda o que están en varias; los socios del Sindicato Cerro Colorado se habían cerrado y se distribuyeron en cada tienda los socios que se afilian con posterioridad no aceden al nuevo beneficio.

Interrogado por la reclamada señaló: que no estuvo presente en las negociaciones.

Cuarto: Que, por su parte, la reclamada aportó únicamente prueba instrumental, consistente en:

- 1.- Copia de caratula de informe de fiscalización N° 1322/2024/583.
- 2.- Copia de informe de exposición fiscalización N° 1322/2024/583.
- 3.- Copia de resolución de multa 8738/2024/8 junto a correo de notificación de la misma.
- 4.- Copia de activación de fiscalización N° 1322/2024/583.
- 5.- Copia de notificación de inicio de procedimiento de fiscalización N° 1322/2024/583.
- 6.- Copia de formulario fi-2 y Fi-4 de procedimiento de fiscalización N° 1322/2024/583.
- 7.- Copia de correos electrónicos emitidos en proceso de fiscalización.
- 8.- Copia de liquidaciones de sueldo, contratos de trabajo, anexos, contrato colectivo y nómina de socios aportadas en la fiscalización de autos.
- 9.- Copia de oficio Circular 2000-20/2024.

Quinto: Que los hechos señalados en la demanda, contestación, el



hecho pacífico fijado por el tribunal y la prueba aportada al proceso, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, permiten concluir:

1.- Que con fecha 31 de enero de 2024 el Sindicato de Empresa Servicios Generales Cerro Colorado Ltda. efectuó una solicitud de activación de fiscalización ante la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Oriente, por no cumplir estipulaciones en el contrato colectivo, cuestión que consta de la solicitud de activación de fiscalización.

2.- Que lo anterior motivó la respectiva fiscalización por la reclamada, oportunidad en que se constató: que 14 trabajadores de la empresa que estaban con relación laboral vigente, son socios del sindicato reclamante, todos afiliados con posterioridad a la fecha en que comenzó a regir el contrato colectivo entre la reclamante de autos y la organización sindical respectiva; que el contrato colectivo suscrito entre las partes se encuentra vigente entre el 10 de abril de 2021 al 9 de abril de 2024; que la cláusula primera del contrato colectivo permite concluir que los trabajadores mencionados están afectos al contrato colectivo a partir de la fecha de afiliación sindical por lo cual deben recibir el aguinaldo de navidad y fiestas patrias contenida en la cláusula cuarta del contrato, no recibiendo 5 de ellos los correspondientes al año 2023 y el resto solo parcialmente y los 14 trabajadores una gift card de navidad prevista en la misma cláusula.

Lo anterior se tendrá por cierto del informe de exposición de antecedentes efectuada por el fiscalizador.

3.- Que lo anterior motivó que la reclamada dictara el acto administrativo impugnado, sancionando a la empresa al pago de una multa equivalente a 60 UTM, por no cumplir las estipulaciones del contrato colectivo, estimando infringido el inciso segundo del artículo 326 del Código del Trabajo, en relación al artículo 506 del mismo cuerpo legal, dando cumplimiento al contrato colectivo suscrito entre la empresa y el Sindicato de Empresa Servicios Generales Cerro Colorado Ltda., RSU 13220317, de fecha 5 de abril de 2021, vigente desde el 10 del mismo mes y año al 9 de abril de 2024, ambas fechas inclusive, en relación a las obligaciones contenidas en la cláusula primera, “De las partes del contrato”, con respecto “A que los derechos y obligaciones contemplados en este instrumento son extensivos a todos los trabajadores afiliados al sindicato”, toda vez que se constata que el empleador no otorga los beneficios estipulados en la cláusula cuatro: Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad. Los cuales, deben



incorporar al momento de su entrega el respectivo reajuste, a partir de lo pactado en contrato colectivo. Lo anterior al constatar el no pago de la suma de \$80.000, reajustado correspondiente al aguinaldo fiestas patrias, cuyo monto debió ser pagado, en el mes de septiembre del 2023, lo cual, fue pactado en contrato colectivo, con respecto a los siguientes trabajadores: I) Luisa Cáceres Contreras, RUT N°9.065.661-9; II) Gianina González Huencur, RUT 15.329.540-9; III) Rodrigo Bravo Barria, RUT 10.385.070-3; IV) Rosa Cornejo Medina, RUT 7.687.305-4; V) Paulina Nuñez Guerra RUT N 11.650.104-K; VI) Sandra Sigueñas Roque, RUT 25.728.446-8. Los cuales son socios del Sindicato. Quienes, por extensión del instrumento colectivo, de acuerdo con la cláusula “primero”, debieron recibir la suma antes citada, pero recibieron un pago parcial. Además, del no pago de la suma de \$80.000, reajustado correspondiente al aguinaldo navidad, cuyo monto debió ser pagado, en el mes de diciembre del 2023, junto a la entrega de una gift card por la suma de \$29.780, lo cual, fue pactado en contrato colectivo, con respecto a los trabajadores: I) Luisa Cáceres Contreras, RUT N°9.065.661-9; II) Gianina González Huencur, RUT 15.329.540-9; III) Rodrigo Bravo Barria, RUT 10.385.070-3; IV) Rosa Cornejo Medina, RUT 7.687.305-4; V) Sandra Sigueñas Roque, RUT 25.728.446-8; VI) Myriam Pérez Cayuman, RUT 13.437.8417; VII) Leticia Gallardo Cuyul, RUT 16.448.728-8; VIII) Betzabelh Fontena López, RUT 18.630.710-0; IX) Catalina Morales Rubio, RUT 20.257.047-K; X) Paulina Núñez Guerra, 11.650.104-K; XI) Judith Veracierta Centeno, RUT 26.449.415-K; XII) Ester Montilla Viloría, RUT 26.562.515-0; XIII) Erwin García Villalobos; XIV) Paulina Peñaloza Millapan, RUT 11.869.270-5. Los cuales son socios del sindicato. Quienes, por extensión del instrumento colectivo, de acuerdo con la cláusula “primero”, debieron recibir la suma antes citada, pero recibieron en cambio un pago parcial y además, no recibieron una gift card.

Lo anterior fluye del acto administrativo impugnado.

4.- Que la empresa efectivamente no dio los beneficios a los trabajadores señalados en la multa, cuestión que se desprende de la propia alegación de la reclamante en el libelo, quien expuso que no es aplicable los mismos a los trabajadores afiliados con posterioridad a la celebración del contrato colectivo y que figuren en la nómina de trabajadores que concurrieron al contrato, sin perjuicio que los dos primeros testigos de la



propia empresa se encuentran contestes en ello.

5.- Que la reclamante es una gran empresa, lo que se colige del informe de exposición de antecedentes que da cuenta que la empresa tiene 4820 trabajadores.

6.- Que en los últimos 6 meses la empresa cuenta con 33 fiscalizaciones con multa y 4 reclamos con multa, lo que también se advierte del informe de fiscalización.

Sexto: Que corresponde pronunciarse sobre la acción de reclamación, promoviéndose aquella prevista en el artículo 503 del Código del Trabajo en contra la segunda multa contenida en la Resolución de Multa N° 8738/24/8, de fecha 21 de febrero de 2024.

El inciso segundo del artículo 326 del Código del Trabajo dispone: “No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, el incumplimiento de las estipulaciones contenidas en los instrumentos colectivos será sancionado por la Inspección del Trabajo de conformidad al artículo 506. La aplicación, cobro y reclamo de esta multa se efectuará con arreglo a las disposiciones de los artículos 503 y siguientes de este Código”.

Por su parte, el error de hecho, en definitiva, es el equivocado concepto sobre una persona, cosa o hecho, siendo la propia entidad administrativa quien explica cuando también se incurre en un error de hecho, a saber: a) cuando se invoca un infractor equivocado o inexistente jurídicamente; b) cuando el supuesto hecho transgresor no cuadra con el tipo infraccional; c) cuando se superpone a un hecho infraccional sancionado coetáneamente y d) la inexistencia jurídica de la infracción.

Séptimo: Que el primer argumento de la empresa dice relación con la existencia de un error de hecho al cursar la multa, por estimar que estamos en la hipótesis indicada en la letra b) del considerando precedente, por cuanto, a su juicio, los beneficios contenidos en el instrumento colectivo solo son aplicable a los trabajadores que figuran en la nómina que participaron en la suscripción del referido contrato, no habiéndose aplicado una hipótesis de extensión de beneficios, lo que tendría su justificación en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 321, inciso tercero del artículo 323, inciso primero del artículo 328, todos del Código del Trabajo, no habiéndose acordado una cláusula de extensión de beneficios en los términos convenidos en el artículo 322 del mismo cuerpo legal. Por su parte, la reclamada sostiene que corresponde aplicar en el presente caso lo previsto



en el artículo 323 del Código del Ramo.

La cláusula primera del contrato colectivo suscrito por la reclamante y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Servicios Generales Cerro Colorado Ltda. señala: “Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato Colectivo de Trabajo afectará, por una parte, a la Empresa HIPERMERCADOS TOTTUS S.A, y por la otra, a los trabajadores socios del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES CERRO COLORADO LIMITADA, que se individualiza en la nómina adjunta.

Los derechos y obligaciones contemplados en este instrumento son extensivos a todos los trabajadores afiliados al sindicato sin distinción del cargo que éste mantenga dentro de la empresa, así como tampoco a la sucursal en la cual cumple sus funciones ni del tiempo de permanencia en la agrupación sindical o cargo o actividad que desempeñe dentro de la misma, salvo expresa mención en contrario.

Se entenderá por trabajador a todo afiliado/a al sindicato sin distinción de edad, sexo, nacionalidad o condición, por lo que ha de entenderse indistintamente tanto para trabajadores como para trabajadoras a menos de indicarse que sólo es respecto de unos u otros”.

El artículo 321 del Código del Trabajo indica: “Instrumentos colectivos y su contenido. Todo instrumento colectivo deberá contener, a lo menos, las siguientes menciones:

- 1.- La determinación precisa de las partes a quienes afecte.
- 2.- Las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que se hayan acordado, especificándolas detalladamente.
- 3.- El período de vigencia.
- 4.- El acuerdo de extensión de beneficios o la referencia de no haberse alcanzado dicho acuerdo.

Adicionalmente, podrá contener la constitución de una comisión bipartita para la implementación y seguimiento del cumplimiento del instrumento colectivo o mecanismos de resolución de las controversias”.

Por su parte, el artículo 323 del citado cuerpo normativo señala: “Derecho a la libre afiliación y vinculación del trabajador con el instrumento colectivo. El trabajador podrá afiliarse y desafilarse libremente de cualquier sindicato.



No obstante el cambio de afiliación sindical o desafiliación, el trabajador se mantendrá afecto al instrumento colectivo negociado por el sindicato al que pertenecía y que estuviere vigente, debiendo pagar el total de la cuota mensual ordinaria de ese sindicato durante toda la vigencia de dicho instrumento colectivo. Al término de la vigencia del instrumento colectivo del sindicato al que estaba afiliado, el trabajador pasará a estar afecto al instrumento colectivo del sindicato al que se hubiere afiliado, de existir este.

Una vez iniciada la negociación colectiva, los trabajadores involucrados permanecerán afectos a esta, así como al instrumento colectivo a que dicha negociación diere lugar.

El artículo 328 del Código del Ramo manifiesta: "Contenido del proyecto de contrato colectivo. En la presentación del proyecto de contrato colectivo se deberán explicitar, a lo menos, las cláusulas que se proponen, la vigencia ofrecida, la comisión negociadora sindical y el domicilio físico y electrónico de él o los sindicatos respectivos.

En esta misma oportunidad deberán presentar la nómina de los trabajadores que hasta ese momento se encuentren afiliados.

El sindicato podrá explicar los fundamentos de su propuesta de contrato y acompañar los antecedentes que sustenten su presentación".

Finalmente, el artículo 322 del Código del Trabajo señala: "Aplicación de las estipulaciones de un instrumento colectivo. La comunicación al empleador deberá realizarse por escrito al correo electrónico designado por este y enviarse copia de la misma a la Inspección del Trabajo.

Las partes de un instrumento colectivo podrán acordar la aplicación general o parcial de sus estipulaciones a todos o parte de los trabajadores de la empresa o establecimiento de empresa sin afiliación sindical. En el caso antes señalado, para acceder a los beneficios dichos trabajadores deberán aceptar la extensión y obligarse a pagar todo o parte de la cuota ordinaria de la organización sindical, según lo establezca el acuerdo.

El acuerdo de extensión de que trata el inciso anterior deberá fijar criterios objetivos, generales y no arbitrarios para extender los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical.

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador podrá aplicar a todos los trabajadores de la empresa las cláusulas pactadas de reajuste de remuneraciones conforme a la variación del Índice de Precios al



Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, siempre que dicho reajuste se haya contemplado en su respuesta al proyecto de contrato colectivo”.

Octavo: Que lo primero que debe tenerse presente es que del tenor del contrato colectivo si bien en el primer párrafo se establece que los beneficios contenidos en el mismo se aplican a los socios contenidos en la nómina que se adjunta al contrato, posteriormente establece de manera expresa que los mismos son extensivos a todos los trabajadores afiliados al sindicato, sin distinción de cargo, de sucursal, definiendo con posterioridad que por trabajador se entiende a todo afiliado a la organización sindical.

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española señala que afiliado deriva de afiliar, como “dicho de una persona asociadas a otras para formar una corporación o una sociedad”. Finalmente, afiliar según la misma consiste en “incorporar o inscribir a alguien en una organización o en un grupo”.

En definitiva del tenor de la propia disposición contractual se advierte que ella no realizó distinción alguna entre trabajador, haciendo extensivo los derechos y obligaciones contenidos en el instrumento a todo afiliado, vale decir a quien se incorpore o inscribe al sindicato que es parte del mismo. En ese sentido, los cuerpos normativos citados por la empresa en ningún caso circunscribe la misma únicamente a los trabajadores que formaban parte de la organización sindical al momento de suscribirse el mismo. Así, el artículo 321 del Código del Trabajo se refiere a las estipulaciones que debe contener el instrumento colectivo, dentro del cual se encuentra la obligación de señalar a las partes a quienes afecta; tampoco se advierte como el artículo 323 permitiría arribar a dicha conclusión, limitándose a regular la norma la hipótesis de cambio de organización sindical de los trabajadores y dilucidar cual instrumento sería aplicable en dicho caso; y, finalmente, el hecho que al momento de negociar se deba señalar la nómina de trabajadores afiliados al sindicato tampoco permite arribar dicha conclusión. Sin perjuicio de ello, todo la argumentación esgrimida por la parte reclamante obvia el hecho que dentro del marco de la negociación colectiva las partes, en virtud de la libertad de negociación, y siempre en la medida que no existan cláusulas prohibidas o contrarias al ordenamiento jurídico laboral, puedan pactar condiciones diversas a las contenidas en la normativa, siendo perfectamente posible que las partes hayan pactado una



cuestión diversa a la contenida en la norma en relación a si se aplica uno u otro beneficio a todos los afiliados o quienes en principio concurrieron al acuerdo, debiendo estarse, salvo en los casos previamente señalados, al tenor de lo señalado en la cláusula contractual, la que estableció como extensión de los derechos y obligaciones contenidas en el instrumento a todos los afiliados –no efectuando distinción alguna-.

Finalmente, el artículo 322 del Código Laboral malamente tiene aplicación en la especie, toda vez que la misma regula la hipótesis de trabajadores que no están sujeta a organización sindical alguna.

De lo expuesto no se advierte error de hecho alguno.

Noveno: Que la segunda argumentación dice relación con un error de derecho, haciendo alusión que en definitiva la extensión a todos los afiliados al sindicato no fue la intención de los contratantes del contrato; sin embargo, lo cierto es que no se aportó prueba idónea que permita dar cuenta de ello, toda vez que los testigos aportados por la empresa son todos de oídas, ninguno de ellos participó en la comisión negociadora del instrumento colectivo, limitándose a señalar que tomaron conocimiento de sus dichos por terceros, personas que supuestamente habrían participado, lo que no genera convicción al tribunal para demostrar lo que pretende la empresa con ellos, sin perjuicio que su declaración parece poco creíble teniendo presente la falta de imparcialidad de los mismos en el juicio, toda vez que al ser trabajadores de la empresa con las funciones que ostentan resulta evidente su interés en que la interpretación sostenida por la empresa sea aquella que considere el tribunal.

Décimo: Que tampoco se advierte que el fiscalizador se haya excedido en sus facultades y, en definitiva haya procedido a interpretar el contrato, limitándose a constatar la aplicación de los beneficios contenidos en el contrato, conforme a la forma en que literalmente quedó establecida en la convención, concluyendo que de acuerdo a la cláusula primera, que dispone expresamente que los derechos y obligaciones se aplican a los afiliados –sin distinción- la empresa no estaba otorgando alguno de ellos y otros solo parcialmente a trabajadores que se afiliaron con posterioridad a la suscripción del convenio colectivo, sancionando a la empresa por no cumplir con las estipulaciones contenidas en el. Al contrario, entiende el tribunal, que es la empresa quien pretende darle a la cláusula contractual un sentido diverso al que aparece del tenor de la disposición, restringiendo el número



de personas beneficiarias del mismo, lo que evidentemente implica un ejercicio interpretativo de la convención y que escapa del objeto de la controversia. Con todo, tampoco se logró demostrar por las razones señaladas en el considerando precedente, la real intención de los contratantes en cuanto al ámbito de aplicación del contrato colectivo.

Undécimo: Que cualquier discusión de inconstitucionalidad de alguna norma en materia laboral escapa de la competencia del tribunal, debiendo dirigirse al órgano facultado para conocer del mismo y siendo normativa aplicable a un caso particular necesariamente debe dársele aplicación.

Duodécimo: Que, finalmente, en lo que dice relación con la solicitud de rebaja la misma será desestimada teniendo presente que en la especie se vieron afectados 14 trabajadores por los hechos, tratándose de una gran empresa y que, además, registra multas en los 6 meses anteriores a la fiscalización en al menos 37 oportunidades, estimándose ajustada la sanción aplicada a la empresa.

Décimo tercero: Que el resto de la prueba rendida en autos, analizada de conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada alteran o modifican lo razonado en los considerandos precedentes.

Décimo cuarto: Que siendo vencida en todas sus partes la empresa y estimando el tribunal que la misma no tuvo motivos plausibles para litigar, se condenará en costas a la reclamante, regulándose las personales en \$650.000.

Por estas consideraciones, teniendo, además en consideración lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes, 446 y siguientes, 503 y siguientes del Código del Trabajo; artículo 23 del DFL N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 1967 y demás disposiciones legales aplicables, **se declara:**

I.- Que se rechaza la acción de reclamación promovida por la empresa Hipermercado Tottus S.A. en contra la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente y, en consecuencia, se mantiene la Resolución de Multa N° 8738/24/8, de fecha 21 de febrero de 2024

II.- Que se condena en costas a la reclamante.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

RIT I-212-2024.

RUC 24-4-0558364-6.

Dictada por don Mauricio Guajardo Espinoza, Juez Titular del Primer



Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



A contar del 07 de abril de 2024, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>